

la actividad laboral que venía desempeñando en el momento del accidente de trabajo acaecido en diciembre de 2003. A esos efectos y conforme la jurisprudencia de nuestro más alto Tribunal, deberemos acudir al binomio lesiones-función (STS 9-04-1990) a los efectos de definir la incapacidad y sus grados, entendiéndose que la incapacidad permanente total (contingencia ésta que se interesa) es aquella que, si bien no impide desempeñar cualquier tipo de trabajo, si inhabilita para el desarrollo de la actividad profesional habitual (entendida como aquella que desempeña con carácter continuo, y no como grupo profesional - STS 28-02-2005).

Todo ello teniendo presente que los criterios generales sentados por nuestra jurisprudencia en materia de valoración de la capacidad laboral pueden resumirse en los siguientes:

1- La decisión que en cada supuesto se deba de adoptar, debe someterse a un necesario proceso de individualización, en atención a cuáles sean las concretas particularidades del caso a enjuiciar (SSTS 2-4-1992 y 29-1-1993), que lo diferencian de las situaciones de otros distintos afectados, tanto por la incidencia de otras lesiones, como por la concreta actividad desempeñada por el mismo, que es la determinante a efectos de esa valoración, teniendo en cuenta la desarrollada, en su caso, en el momento del percance o del inicio de la situación de baja o de solicitud de la valoración invalidante (STS de 23-11-2000).

2- El carácter marcadamente profesional de nuestro sistema de protección social en relación con la invalidez es determinante, por lo que lo que interesa valorar es cuál sea la capacidad laboral residual que, tras la incidencia de las secuelas que han sido, tenidas como definitivas, continúa ostentando el afectado;

3- La valoración de la capacidad laboral tiene que verificarse teniendo en cuenta: a) que la prestación de un trabajo o actividad debe ser realizado en condiciones normales de habitualidad, a los efectos de que, con un esfuerzo normal, se pueda obtener el rendimiento que sea razonablemente exigible (STS 22-9-1989), sin que por lo tanto sea preciso para ello la adición, por parte del sujeto afectado, de un sobreesfuerzo que deba ser tenido como especial (SSTS de 11-10-1979, 21-2-1981 y 22-9-1989), y b) además, prestando un trabajo concretor o desarro-

llando la actividad, tanto con la necesaria profesionalidad (STS 14-2-1989) como conforme a las exigencias normales de continuidad, dedicación y eficacia, que son legalmente exigibles (STS 7-3-1990) y consecuentemente, con desempeño de un modo continuo y de acuerdo con la jornada laboral que sea la ordinaria en el sector de actividad o en la empresa concreta (SSTS 16-2-1989 o de 23-2-1990);

4- Y, por último, debe tenerse presente que el desempeño de la teórica actividad, no debe de implicar un incremento del riesgo físico, propio o ajeno, de compañeros de trabajo o de terceros.

TERCEROS.- En el presente caso, llama la atención, como ya puso de manifiesto la sentencia de este mismo Juzgado de fecha 20 de octubre de 2006, dictada en los autos nº 723/04, las dispares conclusiones que cabe obtener en función de los datos que contienen los informes médicos emitidos por los facultativos del Hospital Comarcal de esta Ciudad, que trataron al actor, y el informe médico de valoración que obra en el expediente administrativo, de modo tal que, en una situación de litigio entre la Administración de la Seguridad Social y la Mutua, por un lado, y el trabajador, por otro, el informe forense emitido a petición de este Juzgado en los autos referidos debe ser tomado como punto de referencia para la adopción de la decisión que ponga fin a dicho litigio, dada la objetividad e imparcialidad que cabe presumir en el mismo, por ser ajeno a la contingencia prestacional que aquí se dilucida. Y tal informe no hace sino corroborar la situación crónica que presenta el actor en las secuelas de su hombro derecho que presenta el actor como consecuencia de la lesión sufrida en el accidente laboral en que se vio envuelto en el año 2003; carácter crónico que determina una limitación funcional para la realización de esfuerzos físicos de intensidad moderada a leve y que, puesta en relación, con la profesión que habitualmente venía desempeñando-peón de la construcción-, ha de ser considerada invalidante de forma total para el ejercicio de la misma.

De este modo, el supuesto de hecho que se desprende del relato fáctico precedentemente expuesto es el que contempla el Art. 137.4 del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 junio, que aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la